

Informe de Inteligencia Corporativa (23 al 29 de Abril del 2026)



RESUMEN EJECUTIVO

El período analizado está marcado por hechos políticos e internacionales que apuntan a la consolidación e irreversibilidad del proceso venezolano. Simultáneamente, en el ámbito económico continúan surgiendo proyecciones alentadoras sobre un fuerte crecimiento del PIB para este 2026. Todo esto ocurre mientras las demandas sociales de una población, afectada por años de precariedad, se manifiestan cada vez con mayor claridad y fuerza. A continuación, se detalla cada área por separado.

POLITICA

La llegada del nuevo Encargado de Negocios de Estados Unidos para Venezuela —un cambio que inicialmente lució intempestivo— se interpreta de manera positiva; sugiere que, para la administración estadounidense, la fase de estabilización política (la "Etapa Uno de la Secuencia Rubio") está fundamentalmente concluida. Actualmente, el Gobierno Interino se percibe sólido, goza de un ambiente de gobernabilidad y no enfrenta amenazas militares ni populares internas. Por ello, se abre el momento para implementar reformas institucionales en entidades clave como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE), el servicio exterior y la Contraloría General de la República. Aunque es poco probable que estas modificaciones incluyan a figuras abiertamente vinculadas a la oposición que lideró la campaña del 28 de julio, sí parecen orientadas a desmontar o mitigar la hegemonía del PSUV sobre el aparato estatal.

En este contexto, la figura de Diosdado Cabello —quien mantiene sus cargos ministeriales y partidistas, así como su programa televisivo de retórica polarizante y ofensiva— proyecta la sensación de que el proceso de cambio es lento e insuficiente. Sin embargo, su influencia política real ha disminuido significativamente y la postura de Estados Unidos hacia él se mantiene inalterada, aunque no se conozcan pasos recientes para ejecutarla. Los inminentes cambios que se rumorean en el SENIAT enviarán una señal clara al respecto. Asimismo, las quejas públicas de figuras radicales del chavismo, como Mario Silva (incluso amenazado de cárcel), evidencian una profunda división interna en el oficialismo. Paralelamente, los hermanos Rodríguez consolidan su poder al tiempo que fortalecen su alianza con la administración de Donald Trump. Por otro lado, continúan las idas y venidas sobre los anuncios del regreso de María Corina Machado al país; la situación es incierta,

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

pues no queda claro si su objetivo sería iniciar un recorrido para unas elecciones aún sin fecha, o promover un proceso de movilización popular, lo cual resultaría disonante con las prioridades económicas actuales de la población.

INSTITUCIONALIDAD

Se confirmó, a través de contactos con el sector académico, que el Ejecutivo está financiando encuestas de monitoreo continuo (incluyendo firmas como Datanálisis) utilizando canales universitarios. **(HIS)**

Respecto a la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se prevé la sustitución de aproximadamente la mitad de sus integrantes. La estrategia apunta a nombramientos intermedios sin cambios radicales. Por razones de estabilidad, la Sala Constitucional no será cedida a perfiles vinculados a la oposición radical. Este proceso de conformación institucional tomará varias semanas, proyectando su cierre para el mes de mayo.

Información de una fuente militar activa indica que asesores de Irán, Rusia y China mantienen una presencia directa en el diseño de estrategias y el manejo tecnológico dentro de la Policía Nacional y el SEBIN, operando bajo la coordinación de Diosdado Cabello.



La directriz central es mantener un perfil bajo frente a los representantes estadounidenses. Aunque el personal de Estados Unidos está ingresando gradualmente al SEBIN y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), se les mantiene aislados de las operaciones tecnológicas controladas por los asesores internacionales aliados. **(HIS)**

Esta estrategia de **compartimentación deliberada** sugiere la existencia de una estructura operativa paralela, donde la presencia estadounidense se limita a niveles de supervisión administrativa o diplomática, sin acceso real a los nodos de decisión estratégica. Al mantener el núcleo del soporte de inteligencia y la arquitectura ciber-técnica bajo la tutela de **Rusia, Irán y China**, el aparato de seguridad nacional blinda sus capacidades de vigilancia y control social frente a posibles monitoreos de Washington. Esta bicefalia técnica

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

permite al Ejecutivo proyectar una imagen de normalización institucional hacia Occidente, mientras consolida un eje de seguridad hermético con potencias extra-continenciales bajo una cadena de mando cerrada y discreta.

Estrategia Oficialista y Movilizaciones

El Ejecutivo ha iniciado un despliegue nacional ("peregrinaje") con una clara división territorial: Jorge Rodríguez (Sur y Oriente), Delcy Rodríguez (Centro y Occidente) y Diosdado Cabello (Los Andes).

Los reportes de observadores en Mérida, Carabobo y Anzoátegui confirman un cambio radical en el formato de estos eventos. Son actos sobrios, puntuales, formales y con estricto protocolo. Destaca la total eliminación de la iconografía tradicional (ausencia de color rojo y símbolos del PSUV) y de la carga ideológica; no hay menciones a Hugo Chávez ni a Nicolás Maduro. El discurso oficial se enfoca exclusivamente en el desarrollo, la reconciliación, la paz y la viabilidad de una nueva, aunque compleja, relación con los Estados Unidos.

A pesar de este cambio de imagen, la figura de Diosdado Cabello sigue generando un fuerte rechazo en las regiones que visita (como en el estado Táchira), causando indignación incluso entre facciones aliadas u opositoras moderadas, quienes lo perciben como el único estorbo o amenaza del esquema político anterior.

Escenario Electoral y oposición

Existe la posibilidad de que, ante la activación del Registro Electoral Permanente (CNE), el gobierno intente forzar un escenario electoral a corto plazo para presionar a la oposición.

Esta maniobra electoral por parte del oficialismo buscaría neutralizar la reorganización de las bases opositoras antes de que logren consolidar una estructura de fiscalización efectiva, aprovechando el control actual sobre el aparato del CNE. Sin embargo, este escenario de "madrugonazo" choca frontalmente con la necesidad de proyectar una imagen de normalización institucional ante los mercados globales y los acreedores de la deuda externa, quienes exigen horizontes de previsibilidad superiores a los **24 meses** para comprometer capitales de envergadura. En este sentido, la tensión interna se divide entre la urgencia política de asegurar la permanencia en el poder y la exigencia técnica de mantener el clima de "**paz funcional**" que permita concretar la recuperación petrolera y gasífera, pilares fundamentales para el sostenimiento financiero del nuevo esquema de gobierno a mediano plazo.

Por otro lado, se evaluó el impacto de una posible campaña política anticipada liderada por María Corina Machado. Existe un consenso en que un clima de agitación electoral prematuro es contraproducente para el país en este momento. La prioridad nacional es la estabilización económica, la atracción de inversiones y la mejora del ingreso en sectores estratégicos. Voceros de la propia oposición han declarado públicamente que no visualizan elecciones en un plazo menor a un año y medio o dos años.

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

La situación es de **reestructuración profunda y parálisis operativa parcial**. No se ha producido una destitución fulminante de la totalidad de los magistrados, pero sí una salida masiva de sus figuras clave mediante procesos de "jubilación" forzada o concertada.



SITUACION DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

- **Salida de Magistrados:** Entre el 27 y 28 de abril, se formalizó la jubilación de **8 magistrados principales**, incluyendo figuras como **Maikel Moreno, Edgar Gavidia, Elsa Gómez y Luis Damiani Bustillos**.
- **Estado de "No Despacho":** Desde el pasado 28 de abril, diversas salas (como la **Político-Administrativa**) han declarado oficialmente que no habrá despacho "hasta nuevo aviso". Esto indica una parálisis administrativa mientras se definen las nuevas designaciones.
- **Renovación en Marcha:** La Asamblea Nacional ha iniciado formalmente los mecanismos para renovar aproximadamente al **70% de los integrantes** del máximo tribunal. Este movimiento se puede interpretar como un ajuste de poder interno para reducir la influencia de sectores radicales y refrescar la imagen del Poder Judicial.
- **Excepción en la Sala Electoral:** Es la única instancia donde no se han reportado retiros masivos hasta el momento, manteniéndose como el reducto que avaló los resultados de 2024.
- **Liderazgo Temporal:** En varias salas, la presidencia y el quórum están siendo asumidos por **magistrados suplentes** (como Emilio Ramos González en la Político-Administrativa) debido a las vacantes absolutas de los principales.

El TSJ está siendo **desmantelado y reconstruido** por vía legislativa y mediante jubilaciones masivas. La institución se encuentra en un limbo operativo a la espera de que el Comité de Postulaciones Judiciales presente los nuevos nombres.

FINANZAS

Existe un consenso generalizado entre economistas y analistas financieros de que Venezuela experimentará un crecimiento del PIB de dos dígitos durante este 2026. Este impulso estará liderado por el sector petrolero, cuya expansión productiva ya todos reconocen en 1.3 millones de barriles diarios (MBD), e incluso algunos atisban la posibilidad de alcanzar los 1.5 MBD. Estas cifras de producción y exportación, combinadas con ventas a precios mayores, la eliminación de los elevados descuentos otorgados a China y la suspensión de entregas petroleras a Cuba, proyectan ingresos adicionales cercanos a los 13.000 millones de dólares (con 1.3 MBD) y hasta 20.000 millones de dólares (si se alcanzan los 1.5 MBD). Todo este flujo de divisas, sumado a la incorporación de reservas internacionales al Banco Central de Venezuela (como los DEG y el oro de Londres) tras la normalización con el Fondo Monetario Internacional, hace perfectamente viable no solo la reducción de la brecha cambiaria en los próximos meses, sino su cierre definitivo, logrando así un fortalecimiento real del bolívar.



Banco Central de Venezuela

El nuevo presidente del BCV sostuvo un encuentro con la directiva de la Asociación Bancaria de Venezuela. En esta reunión se comunicaron las instrucciones directas de la Presidencia: fortalecer el bolívar, reducir la brecha cambiaria y lograr la unificación del mercado oficial y paralelo para finales de año, con el fin de disminuir significativamente las presiones inflacionarias.

Se anunció también la intención de flexibilizar el encaje legal para dinamizar el crédito interno. Adicionalmente, se mencionó el objetivo de renegociar la deuda externa este mismo año. Sin embargo, este último punto carece de viabilidad técnica y operativa inmediata debido a la debilidad institucional actual del BCV y a la ausencia de una comisión técnica especializada, paso previo e indispensable para un proceso de tal magnitud.

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO**Nicolas Maduro, Juicio en EE. UU. y Sanciones**

En relación con el proceso judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos, la licencia emitida por la OFAC que autoriza el pago de su defensa privada contiene restricciones extremas. Se prohíbe el uso de fondos originados antes del 15 de marzo, recursos destinados a áreas vitales (salud, educación) y capital proveniente de gobiernos extranjeros, evitando así triangulaciones. En la práctica, el gobierno estadounidense (el ente acusador) mantiene el control y fiscalización de los honorarios de los abogados defensores, colocando a la defensa en una posición de vulnerabilidad absoluta.

Geopolítica Regional y Global

La situación internacional sigue favoreciendo de manera clara la consolidación del proceso venezolano. La guerra contra Irán continúa, con Donald Trump sosteniendo casi todas las cartas a su favor; el país persa enfrenta una derrota militar, colapso económico, aislamiento internacional y una implosión de su liderazgo. Es solo cuestión de tiempo para que ese régimen acepte algún tipo de acuerdo bajo los términos básicos impuestos por el ganador del conflicto. En este mismo plano externo, la situación del régimen cubano es de extrema precariedad y la determinación estadounidense es muy clara, por lo que es esperable en cualquier momento un desenlace en la isla, ya sea negociado, violento o una combinación de ambos. Las posibles resoluciones en Irán y Cuba contribuyen decididamente a solidificar el proceso venezolano.

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

La administración de Donald Trump ha endurecido su postura frente a Teherán mediante un ultimátum definitivo, exigiendo el cese total del programa nuclear por los próximos 20 años como condición innegociable para levantar el bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz. Esta medida de "presión máxima" ocurre en un momento crítico donde el rial iraní ha colapsado y los precios del petróleo continúan al alza, impactando la economía global. Mientras tanto, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, comparece ante el Congreso para defender la inversión de 25 mil millones de dólares en el conflicto y la legalidad del cerco energético, asegurando que la vigilancia estadounidense se mantendrá estricta hasta que Irán acepte los términos de Washington.

En el Líbano, la tregua entre Israel y Hezbolá se tambalea debido a nuevos bombardeos israelíes en el sur que han dejado víctimas civiles, a pesar de que Tel Aviv niega intenciones de anexión territorial.

* Irán: El país atraviesa un colapso interno severo y una crisis de liquidez que imposibilita el pago de salarios. Existe una fractura interna sobre quién debe asumir la responsabilidad de liderar las negociaciones con Estados Unidos y aceptar la capitulación en materia nuclear a cambio de alivio en las sanciones (apertura del Estrecho de Ormuz).

* Cuba: La cúpula gobernante se encuentra acorralada. Se deben tomar muy en serio las recientes declaraciones del presidente estadounidense sobre el uso de la fuerza para lograr un cambio de régimen en la isla.

* Colombia: De cara a las próximas elecciones presidenciales, Gustavo Petro mantiene el liderazgo en las encuestas. Ha demostrado gran habilidad política moderando su discurso, alejándose de extremismos ideológicos y priorizando el pragmatismo en las relaciones fronterizas y binacionales.

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

* Brasil: El escenario electoral se ha estrechado. Jair Bolsonaro ha mostrado una recuperación significativa en los sondeos, logrando un empate técnico con Lula da Silva, cuya campaña se ve afectada por su estado de salud.

Por otro lado la probabilidad de una guerra abierta entre China e India en 2026 se mantiene baja debido a la disuasión nuclear y la interdependencia económica regional. Sin embargo, la situación es de extrema gravedad dado que ambos países conservan despliegues militares masivos en la Línea de Control Actual (LAC). Un error de cálculo o un enfrentamiento accidental en la frontera desencadenaría una crisis global inmediata, paralizando las rutas comerciales terrestres y marítimas en Asia y alterando los mercados energéticos. Aunque existen esfuerzos diplomáticos recientes para normalizar el comercio, la competencia por la influencia en el Indopacífico y la construcción de infraestructuras militares en zonas en disputa mantienen un riesgo latente que, de materializarse, obligaría a una reconfiguración forzosa del orden geopolítico mundial.

Finalmente, en el ámbito internacional, destaca la abrupta salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP y la OPEP+. Este evento relevante, sumado a lo ocurrido en Venezuela y el eventual desenlace iraní, podría marcar el inicio de una disminución significativa o la disolución de la sexagenaria OPEP. Esto se alinea con el propósito histórico de los sectores conservadores estadounidenses —recordando la intención de Ronald Reagan de "ponerla de rodillas"— de lograr un mercado petrolero internacional libre de la presencia de carteles

ANÁLISIS (Servicio Exterior)

En concordancia con análisis recientes sobre política exterior, se evidencian señales de una reestructuración diplomática. El objetivo es transformar los consulados, dejando atrás su uso como centros de promoción ideológica del chavismo, para convertirlos en verdaderos facilitadores de trámites para los venezolanos en el exterior. Movimientos de personal diplomático recientes confirman esta tendencia de normalización institucional. (HIS)

Esta transición hacia un modelo de "**Consulado de Servicios**" no es solo un cambio de imagen, sino una necesidad operativa para reintegrar a la diáspora en el circuito económico nacional. La reciente propuesta de implementar **Consulados Digitales** y el restablecimiento de relaciones consulares con actores clave de la región (como República Dominicana y el reciente deshielo con Washington) buscan reducir el limbo administrativo de millones de venezolanos. Al agilizar la emisión de pasaportes, apostillas y registros mediante plataformas tecnológicas despolitizadas, el Estado no solo recupera su capacidad de recaudación consular, sino que neutraliza uno de los principales focos de crítica en foros internacionales de derechos humanos. Este giro hacia la eficiencia técnica es un requisito indispensable para la validación de la **normalización institucional** ante organismos como el Parlasur, donde el retorno de Venezuela ya se perfila como un hecho consumado bajo este nuevo enfoque de gestión.

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

El regreso de American Airlines a Venezuela este abril de 2026 marca el restablecimiento de un eje logístico vital y simboliza la normalización de las relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos. Este reinicio, amparado en nuevos protocolos de seguridad y garantías operacionales, reduce significativamente los costos y tiempos de traslado, reintegrando al país en el mapa de inversión de las multinacionales estadounidenses tras años de aislamiento. La convergencia entre intereses de negocios y diplomacia sugiere que esta apertura actúa como el catalizador de una etapa de reactivación económica que posiciona nuevamente al sector corporativo venezolano como un destino estratégico para el capital extranjero.

POLITICA

Delcy Rodríguez hizo un llamado contundente a la tolerancia y al reconocimiento mutuo entre distintos actores, subrayando la necesidad de superar las barreras partidistas. En su reflexión, enfatizó que las diferencias ideológicas, haciendo alusión directa a posturas divergentes como el chavismo y Acción Democrática, no deben ser motivo para fomentar la intolerancia o negar la cortesía básica frente al adversario. Rodríguez destacó que la verdadera identidad de los venezolanos se fundamenta en la cordialidad, la sonrisa y la disposición de ayudar al prójimo, rechazando tajantemente las actitudes irracionales que promueven la división y el distanciamiento ciudadano.



Asimismo, advirtió que el país ha enfrentado una génesis histórica marcada por el extremismo y el fascismo que debe ser superada de manera definitiva. Definió la coyuntura actual como un nuevo hito destinado a marcar la historia nacional mediante la sanación de esas heridas sociales y la falta de convivencia. En este sentido, invitó a la reflexión profunda, recalcando que la prioridad fundamental de esta nueva etapa política debe ser erradicar por completo las expresiones de odio y reconstruir el respeto mutuo dentro de la sociedad.

Sistema judicial estadounidense prioriza la integridad del proceso por encima del origen de los fondos

Desde una perspectiva de inteligencia procesal, la decisión de permitir que fondos del Estado venezolano financien la defensa privada de la cúpula gobernante no debe interpretarse como una concesión de buena voluntad, sino como un movimiento estratégico de la Fiscalía Federal para "blindar" el expediente penal.

Según el análisis del experto John R. De La Vega, el sistema judicial estadounidense prioriza la integridad del proceso por encima del origen de los fondos en casos de esta magnitud; al permitir este pago, el Departamento de Justicia elimina de raíz cualquier argumento futuro sobre la violación del derecho constitucional a una defensa efectiva. En términos técnicos,

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

los fiscales están sacrificando un activo financiero inmediato para asegurar que, una vez obtenida una condena, esta sea jurídicamente inexpugnable y no existan resquicios legales que permitan a los abogados de Maduro y Flores solicitar la nulidad del juicio por indefensión derivada de las sanciones económicas.



Al ceder en este punto y permitir el flujo de recursos estatales para cubrir los honorarios de las firmas de abogados en Washington y Nueva York, el gobierno estadounidense neutraliza la principal narrativa de la defensa, que intentaba posicionar al Estado como un ente que bloquea las garantías básicas del debido proceso.

Es, en esencia, una inversión de riesgo: se permite el uso de dinero público venezolano ahora para garantizar que el castigo penal sea definitivo y no pueda ser revertido por defectos de forma en el largo plazo.

Finalmente, esta situación pone de relieve la complejidad de enfrentar a figuras que controlan el aparato financiero de una nación entera para fines de defensa personal. Para los analistas de inteligencia, es evidente que la estrategia de los "chavistas pesados" ha sido utilizar el presupuesto de la República como una caja chica de emergencia jurídica, argumentando que su defensa es una cuestión de Estado.

Sin embargo, al aceptar este esquema, las autoridades estadounidenses han cerrado la última puerta de escape procesal que le quedaba al entorno de Miraflores. De este modo, el caso se encamina hacia una fase donde el debate se centrará estrictamente en las evidencias criminales y no en las limitaciones económicas de los acusados. Para el Departamento de Justicia, asegurar una condena que sea percibida como legítima y difícil de impugnar por la comunidad jurídica internacional es el objetivo supremo, incluso si eso implica la ironía de ver a los señalados por corrupción pagando su libertad temporal con los mismos recursos que se les acusa de haber administrado indebidamente.

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

La líder opositora María Corina Machado ha reiterado recientemente su firme postura de participar en la próxima contienda presidencial, enfocando su mensaje en la necesidad imperativa de garantizar un proceso electoral competitivo que ofrezca a los ciudadanos opciones reales y verificables.

En un contexto nacional marcado por la expectativa de nuevos comicios en 2026 y la constante presión por la reinstitucionalización del país, su declaración subraya que la legitimidad de cualquier proceso electoral debe sustentarse en la pluralidad política y en la garantía inalienable del respeto a la voluntad popular.

Machado enfatiza que su candidatura no es un hecho aislado, sino una pieza clave dentro de una estrategia mayor que busca movilizar a diversos sectores de la sociedad, promoviendo un escenario donde la participación de múltiples alternativas permita que el pueblo venezolano tome las riendas de su futuro a través del ejercicio libre del sufragio.

Este pronunciamiento se produce en un momento político complejo, donde distintos actores internos y la comunidad internacional siguen de cerca la posibilidad de transiciones democráticas y el cese de las inhabilitaciones.

El exencargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, James Story, ha señalado que cualquier posibilidad de avance real hacia una transición democrática en el país pasa obligatoriamente por un cambio estructural profundo en la cúpula del poder actual. Según el diplomático, la figura de Diosdado Cabello representa el principal obstáculo para cualquier proceso de reinstitucionalización, calificándolo como la mayor «piedra de tranca» dentro de la administración oficialista. Story sostiene que mientras individuos con intereses directos en el mantenimiento del *statu quo* y con agendas marcadas por la confrontación sigan ocupando posiciones clave en las estructuras de seguridad y mando, cualquier intento de diálogo o apertura será sabotado sistemáticamente desde adentro.

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

En este mismo orden de ideas, el exembajador ha subrayado que la presencia de la líder opositora María Corina Machado es indispensable para dotar de legitimidad y dirección política a la ruta de recuperación nacional.

Para Story, el retorno de Machado al escenario público y político interno no es solo una necesidad simbólica, sino una condición logística para articular las demandas de la ciudadanía y consolidar una propuesta de país que cuente con el respaldo necesario tanto a nivel doméstico como internacional. Bajo esta visión, la estabilidad de Venezuela depende de la remoción de los actores que han erosionado la institucionalidad y del empoderamiento de un liderazgo que, a juicio del diplomático, es el único capaz de encauzar la transición hacia un modelo democrático genuino y estable.



La actual coyuntura institucional en Venezuela se ve marcada por una severa crisis de legitimidad del sistema judicial, específicamente en lo que respecta a la imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia. Esta situación se ve agravada por la permanencia de 494 prisioneros políticos, cuya falta de liberación se percibe como una decisión estratégica del Ejecutivo para mantener el control social. El estancamiento de estos procesos legales, sumado a las denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, configura un entorno de alta volatilidad donde las instituciones del Estado son señaladas como herramientas de persecución en lugar de garantes de la ley.

La narrativa predominante en las plataformas digitales sugiere una desconfianza absoluta hacia cualquier proceso de transición mediado por la administración actual, a la cual se vincula con estructuras de criminalidad organizada. Este discurso de confrontación radical, que descarta el diálogo en favor del uso de la fuerza, refleja un agotamiento en la opinión pública que podría derivar en nuevos escenarios de inestabilidad. La percepción de que las

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

tácticas gubernamentales son meras maniobras de dilación incrementa la presión sobre los indicadores de gobernabilidad y complica el panorama para una resolución pacífica de las tensiones políticas vigentes.

Para el jueves 30 de abril de 2026, la agenda de movilizaciones inicia con una convocatoria de carácter gremial liderada por la Coalición Sindical Nacional. El punto de encuentro está fijado para las 9:00 a.m. en la Plaza Morelos, ubicada en la parroquia Candelaria, desde donde los manifestantes pretenden marchar hacia el Palacio de Miraflores. El objetivo central de esta jornada es presionar al Ejecutivo por un aumento del salario mínimo y la restitución de derechos contractuales que consideran vulnerados, advirtiendo que las protestas continuarán de manera sostenida hasta obtener respuestas concretas del Estado. Esta marcha se percibe como el preámbulo a las demandas laborales del día siguiente, marcando un clima de alta presión social en el centro de la capital.



El viernes 1 de mayo de 2026, Día del Trabajador, Caracas será escenario de dos grandes movilizaciones con objetivos contrapuestos. Por un lado, el oficialismo ha convocado a una movilización masiva que representa el cierre de su «peregrinación» nacional contra las sanciones internacionales, la cual culminará con un megaconcierto en el centro de la ciudad. Por el otro, diversos gremios y sindicatos de trabajadores tienen previsto marchar con el fin de llegar a la sede de la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público, buscando denunciar la pérdida de valor del salario y exigir un ajuste general. Mientras que el oficialismo enfoca su narrativa en la soberanía y la resistencia ante el bloqueo, los sectores laborales autónomos se concentrarán en la exigencia del cumplimiento del artículo 91 constitucional bajo la consigna «bono no es salario».

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

Desde la esfera política y los entes del Estado, las declaraciones han sido variadas y estratégicas. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ha hecho un llamado a la unidad nacional y al fortalecimiento de la prosperidad a través de la superación de las sanciones. Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha adelantado la posibilidad de un ajuste salarial «responsable» que podría anunciarse este 1 de mayo. En la acera opuesta, figuras como Henrique Capriles han advertido que un ajuste de apenas 20 o 30 dólares sería considerado una «burla», proponiendo en su lugar una base de 150 dólares mensuales. Se espera un despliegue de seguridad riguroso en las zonas de confluencia para evitar incidentes entre ambas corrientes y garantizar el orden público durante los actos conmemorativos.

El panorama para finales de mayo se presenta sumamente complejo debido a la profunda "brecha de expectativas" generada entre las falsas promesas virales y la realidad de los anuncios económicos del 1 de mayo.

Mientras que en redes sociales han circulado rumores infundados sobre un salario integral de 650 dólares, la postura oficial del Ejecutivo se ha mantenido en la ejecución de medidas "temporales y responsables", lo que inevitablemente derivará en una ola de frustración colectiva. Esta inconformidad será capitalizada por organizaciones como la Unidad Laboral del Zulia y la Coalición Magisterial, quienes ya han calificado la política de bonificación como una forma de "esclavitud moderna" y han advertido que su voz se convertirá en un "estruendo" ante lo que consideran un atropello a sus derechos contractuales. En consecuencia, se espera que la última quincena de mayo esté marcada por paros escalonados y un incremento en la frecuencia de las protestas gremiales en sectores críticos como la educación y la salud.

Desde la perspectiva de la seguridad ciudadana y el orden público, los indicadores de inteligencia sugieren un riesgo latente de violencia focalizada, impulsado por un incremento del 53% en la conflictividad social documentado durante el primer cuatrimestre de 2026. El contexto de transición institucional, derivado de los fallos del TSJ de principios de año, ha creado un terreno fértil para la "confrontación prolongada" en las principales capitales del país. Existe una preocupación real sobre el accionar de grupos radicales o "colectivos" que, ante la pérdida de cuotas de poder, podrían generar disturbios o ataques a manifestaciones pacíficas para desestabilizar el control territorial en zonas estratégicas como el centro de Caracas y las regiones fronterizas de Táchira y Zulia. Este escenario de tensión requerirá de un despliegue de seguridad riguroso pero altamente vigilado, dada la presión internacional sobre los procedimientos de los cuerpos policiales.

Finalmente, el gobierno intentará contrarrestar esta presión interna mediante una narrativa de reactivación económica centrada en la "apertura energética" y la firma de acuerdos de alto perfil, como el reciente Memorándum de Entendimiento con British Petroleum para la explotación de gas en la Plataforma Deltana. La estrategia oficialista se enfocará en proyectar a la Presidenta Encargada como una gestora de estabilidad que, bajo el amparo de la Reforma de la Ley de Hidrocarburos, está logrando el retorno de las grandes transnacionales al país. No obstante, el éxito de esta estrategia para mitigar las protestas de finales de mayo dependerá exclusivamente de si los trabajadores perciben una mejora real en su poder adquisitivo o si, por el contrario, sienten que los grandes convenios petroleros no se traducen en soluciones inmediatas para la canasta básica, lo que podría radicalizar aún más las posiciones de la Unidad Laboral hacia el mes de junio.

FINANZAS

La Administración de Comercio Internacional (ITA) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha oficializado el lanzamiento del **Centro de Información Empresarial de Venezuela (CIEV)**, una plataforma técnica diseñada específicamente para revertir la tendencia negativa del intercambio mercantil y catalizar el retorno del sector privado estadounidense al mercado nacional. Este centro funciona como un núcleo de inteligencia comercial que ofrece a los inversionistas una hoja de ruta clara para navegar el complejo entramado de sanciones y controles de exportación vigentes, eliminando la incertidumbre legal que hasta ahora frenaba la entrada de capitales. Al proporcionar asesoría directa y herramientas de cumplimiento en tiempo real, el gobierno estadounidense busca que sus empresas identifiquen oportunidades de exportación y proyectos de inversión en sectores críticos, posicionándose nuevamente como un actor clave en la dinámica económica del país bajo un marco de seguridad jurídica supervisado por sus propias agencias federales.

Este despliegue institucional se produce en un contexto de deshielo diplomático y tras la emisión de licencias generales que han comenzado a abrir espacios en áreas de alta prioridad como la salud, la energía, la minería y la infraestructura pesada. La iniciativa de Washington envía una señal inequívoca a las juntas directivas transnacionales de que Venezuela ha dejado de ser un mercado considerado "fuera de límites" para convertirse en un terreno de oportunidades emergentes, siempre que se cumpla con la debida diligencia y los protocolos de la OFAC.

Tendencias económicas

La primera tendencia dominante en el panorama financiero venezolano de finales de abril de 2026 es la reinserción institucional del país en el sistema financiero multilateral. Este fenómeno no responde únicamente a una voluntad política, sino a una necesidad pragmática de ambos lados: los organismos internacionales buscan estabilizar un nodo crítico de recursos naturales, mientras que el Estado venezolano requiere el aval técnico para iniciar una reestructuración de deuda soberana creíble. La participación de mediadores regionales, como Brasil, ha sido fundamental para desbloquear el acceso a los Derechos Especiales de Giro (DEG), los cuales se estiman en unos 5.200 millones de dólares. Estos fondos, largamente inmovilizados, actúan ahora como un ancla psicológica para el mercado, sugiriendo que las reservas internacionales cuentan con un respaldo de liquidez inmediata que antes se consideraba inexistente.



Esta tendencia se manifiesta también en el regreso operativo de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su retorno se interpreta como la

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

validación de un riesgo país que, aunque elevado, empieza a mostrar señales de normalización bajo condiciones de gobernanza más estrictas. El BID no solo aporta capital, sino que impone estándares de auditoría y transparencia que obligan a la administración fiscal a profesionalizar sus procesos de rendición de cuentas. Para el sector privado, este es un indicador de que el país está superando el aislamiento crediticio, facilitando la obtención de garantías para proyectos de infraestructura. La reintegración multilateral es, en definitiva, el cimiento sobre el cual se pretende construir la estabilidad fiscal de la próxima década.



En el ámbito regional, el papel de Venezuela en los bloques comerciales como el Mercosur está siendo reevaluado bajo una óptica netamente económica. El interés por reintegrar a Venezuela responde a la dinámica de una región que busca fortalecer sus cadenas de suministro internas frente a la volatilidad de los mercados globales. La capacidad de Venezuela para proveer insumos básicos y energía a precios competitivos es un activo que los socios regionales no pueden ignorar. Por lo tanto, la tendencia hacia una mayor integración comercial se perfila como un motor de crecimiento para las exportaciones no tradicionales. Esta dinámica binacional y regional está creando un ecosistema de negocios más resiliente y menos dependiente de los centros financieros tradicionales del norte.

La sostenibilidad de esta tendencia multilateral dependerá de la capacidad del Estado para cumplir con los compromisos de pago y las reformas estructurales exigidas. Los expertos advierten que el acceso a los fondos del FMI y el Banco Mundial no es un cheque en blanco, sino un contrato de desempeño macroeconómico. La administración debe demostrar que el incremento de la liquidez no se traducirá en una nueva espiral inflacionaria. Esto requiere una coordinación milimétrica entre la política monetaria y la ejecución presupuestaria. El mercado está observando de cerca si el Ejecutivo tiene la disciplina necesaria para resistir las presiones de gasto social excesivo en favor de la inversión productiva.

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

La segunda tendencia fundamental es la convergencia controlada de la paridad cambiaria hacia un punto de equilibrio que reduzca las distorsiones comerciales.

El Banco Central de Venezuela ha abandonado la política de anclaje estricto en favor de una estrategia de deslizamiento controlado o "crawling peg", lo que ha permitido que la tasa oficial se sitúe cerca de los 484,74 bolívares por dólar. Esta medida busca desincentivar el arbitraje financiero y la especulación en el mercado paralelo, los cuales han sido históricamente los motores de la inestabilidad de precios. Al permitir una devaluación gradual, el ente emisor preserva la competitividad de la producción nacional frente a las importaciones, a la vez que gestiona el drenaje de sus reservas internacionales.

La tercera tendencia económica es la optimización del flujo de caja nacional impulsada por el alza sostenida en los precios internacionales de los hidrocarburos.



El conflicto geopolítico en el Estrecho de Ormuz y las tensiones en Oriente Próximo han elevado el precio del crudo Brent por encima de los 100 dólares, permitiendo que la facturación de las exportaciones venezolanas alcance niveles no vistos desde 2018. Solo en marzo de 2026, los ingresos por este concepto aumentaron un 48%

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

respecto al promedio del bimestre anterior. Este flujo extraordinario de divisas proporciona al Estado el oxígeno fiscal necesario para financiar el gasto público sin recurrir a la emisión monetaria inorgánica, lo que ha sido fundamental para frenar la hiperinflación.

Finalmente, el flujo de caja positivo está permitiendo a Venezuela renegociar sus deudas comerciales con socios estratégicos como China y Rusia. La entrega de cargamentos de crudo como forma de pago se está complementando con pagos en efectivo, lo que mejora la calificación crediticia del país ante estos aliados. Esta mejora en las relaciones financieras bilaterales facilita la llegada de nuevas inversiones en infraestructura y tecnología.



La percepción es que Venezuela está utilizando su bonanza petrolera de manera más pragmática que en décadas pasadas, priorizando la estabilidad macroeconómica y el cumplimiento de compromisos internacionales. La liquidez es, en esencia, la herramienta que permite a Venezuela volver a sentarse en la mesa de los negocios globales.

La cuarta tendencia económica es la democratización y expansión del mercado de valores como alternativa de financiamiento e inversión. Ante la persistente restricción del crédito bancario convencional, la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) ha emergido como un actor dinámico y sofisticado. Empresas de diversos sectores, desde el consumo masivo hasta el agroindustrial, están recurriendo a la emisión de papeles comerciales y ofertas públicas de acciones para captar recursos. El caso de Ron Santa Teresa, que negoció montos millonarios en una sola ronda de acciones clase B, es el ejemplo más visible de esta tendencia. El mercado de valores permite a las empresas financiarse a tasas competitivas mientras ofrecen a los inversores locales una cobertura efectiva contra la inflación.

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

Esta tendencia se ve impulsada por la entrada de nuevos inversores minoristas, facilitada por plataformas digitales y aplicaciones móviles que permiten invertir desde montos pequeños. La educación financiera ha crecido entre la población urbana, que ve en la bolsa una forma de preservar el valor de sus ahorros en un entorno multimonedado. El Índice Bursátil Caracas ha mostrado un crecimiento sostenido, superando los 6.500 puntos en sesiones recientes, lo que refleja un apetito por el riesgo en activos reales venezolanos. La BVC no solo es un termómetro económico, sino una herramienta de capitalización para un sector privado que ha demostrado una resiliencia extraordinaria.

La profesionalización de las casas de bolsa y la introducción de nuevos instrumentos financieros, como los certificados de financiamiento bursátil, están profundizando el mercado. Estos instrumentos permiten a los productores, especialmente en el sector agrícola, obtener liquidez inmediata garantizada por sus cosechas o inventarios. La tendencia es hacia una integración más estrecha entre la economía real y el mercado de capitales. Los expertos señalan que esta es la vía más sana para financiar el crecimiento económico, ya que no depende de la emisión monetaria del Estado sino del ahorro privado y la confianza mutua entre agentes económicos.

La seguridad jurídica y la transparencia informativa son los pilares que sostienen esta expansión bursátil. Las empresas emisoras están obligadas a presentar estados financieros auditados y a cumplir con estándares rigurosos de gobierno corporativo. Esto está elevando la calidad de la gestión empresarial en Venezuela, atrayendo incluso el interés de fondos de inversión extranjeros que buscan oportunidades en mercados frontera. La posibilidad de que empresas estatales de servicios públicos abran parte de su capital en la bolsa es una expectativa que podría dinamizar aún más el mercado en los próximos meses. La bolsa es percibida como el espacio de encuentro para la reconstrucción del capital nacional.

Sin embargo, el mercado de valores venezolano sigue siendo pequeño en comparación con otros países de la región. La falta de liquidez en algunos títulos y la

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO**La quinta tendencia económica se centra en la consolidación de un modelo de remuneración laboral basado en bonificaciones en divisas o indexadas, desplazando la estructura salarial tradicional.**

Tanto el sector público como el privado han adoptado este esquema para proteger el ingreso de los trabajadores frente a la inflación, sin comprometer la sostenibilidad financiera de las organizaciones a largo plazo. En el sector público, el "Bono Contra la Guerra Económica" y otros subsidios directos representan ahora la mayor parte del ingreso mensual de millones de empleados y pensionados. Este enfoque permite al Estado ajustar los pagos según la disponibilidad estacional de flujo de caja, evitando el impacto acumulativo de las prestaciones sociales previstas en la legislación laboral vigente.



En el sector privado, la remuneración promedio ha subido a rangos de entre 260 y 270 dólares mensuales, pagados mayoritariamente bajo la figura de bonos de productividad o asistencia. Esta tendencia refleja la necesidad de las empresas de retener talento calificado en un mercado laboral que compite con las opciones de emigración y el trabajo remoto para compañías extranjeras. El ingreso real ha experimentado una mejora modesta en los últimos trimestres, impulsando el consumo en sectores específicos como alimentos, salud y servicios básicos. No obstante, la falta de una reforma profunda de la Ley del Trabajo genera una zona gris de inseguridad jurídica que frena la contratación formal masiva.

La sexta tendencia económica es la flexibilización de los esquemas de inversión extranjera directa a través de licencias específicas y asociaciones mixtas estratégicas. Venezuela ha comprendido que la recuperación masiva de su industria principal y sus servicios básicos requiere capitales y tecnología que solo el sector privado internacional puede aportar.

Bajo el marco de la Ley Antibloqueo y otros instrumentos legales recientes, se han firmado acuerdos con gigantes energéticos como Chevron, Repsol y Eni, que permiten una gestión operativa más autónoma y un control directo sobre el flujo de

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

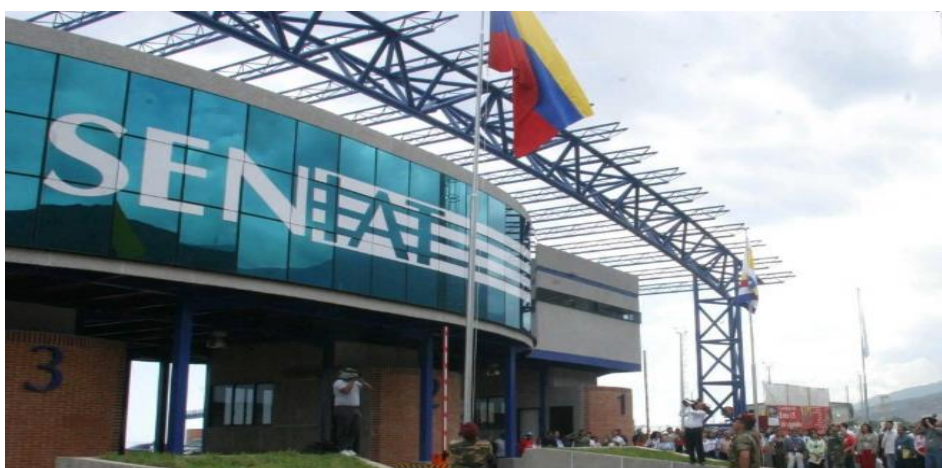
caja. Esta tendencia de "apertura pragmática" es la que está permitiendo el incremento de la producción petrolera hacia la meta de un millón de barriles diarios.



La seguridad jurídica sigue siendo el "nudo gordiano" para atraer capitales de mayor envergadura. Aunque se han dado pasos significativos en la devolución de activos y la compensación a empresas anteriormente nacionalizadas, muchos inversores institucionales siguen cautelosos. La tendencia es hacia la creación de zonas económicas especiales con regímenes fiscales y legales diferenciados, donde se garantiza un entorno de negocios similar al estándar internacional. Estas zonas actúan como laboratorios de apertura económica que podrían expandirse al resto del país si los resultados son positivos. La transparencia en la adjudicación de estos contratos es vital para evitar acusaciones de favoritismo o corrupción.

La séptima tendencia económica es la recuperación acelerada de la conectividad transnacional y el regreso de marcas corporativas globales. Este fenómeno es el indicador más visible de la normalización económica para la clase media y el sector empresarial. El anuncio de American Airlines sobre la habilitación de múltiples frecuencias diarias entre Miami y Caracas, así como el interés de cadenas hoteleras de lujo por retomar sus operaciones, refleja una demanda insatisfecha de servicios de estándar internacional. Esta conectividad no solo facilita el turismo, sino que es vital para la logística de negocios, permitiendo que ejecutivos e inversores extranjeros se desplacen con la regularidad necesaria para supervisar sus activos en el país.

Por último, el regreso de la conectividad es fundamental para la reintegración cultural y social de Venezuela en el mundo. El flujo de personas permite el intercambio de ideas, tecnologías y mejores prácticas de negocios que son esenciales para la modernización del país. La tendencia es hacia un país más abierto, menos insular y más conectado con las tendencias globales de sostenibilidad y eficiencia. Venezuela está dejando de ser una noticia de crisis para convertirse en un destino de negocios y oportunidades. La conectividad es el hilo conductor que une todas las piezas de la recuperación económica en este periodo de abril de 2026.

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

La octava tendencia económica es la creciente presión fiscal y la necesidad de una reforma tributaria que equilibre las cuentas públicas sin asfixiar al sector privado. El Estado venezolano, ante la limitación de otras fuentes de financiamiento, ha incrementado la recaudación de impuestos nacionales y municipales de manera agresiva. Según informes de gremios empresariales, la carga tributaria puede llegar a absorber hasta el 60% de la utilidad bruta de las empresas formales. Esto incluye el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las nuevas contribuciones especiales para el sistema de pensiones. Esta presión fiscal actúa como un desincentivo para la inversión y fomenta la informalidad en la economía.

La novena tendencia económica se observa en el dinamismo de la integración binacional con Colombia, que ha pasado de la retórica diplomática a la ejecución de proyectos conjuntos de infraestructura y comercio. La reapertura total de las fronteras terrestres y la normalización de las relaciones comerciales han creado un corredor económico vital para los estados occidentales de Venezuela. El I Encuentro Económico Binacional en Cúcuta subraya el interés mutuo por reconstruir las cadenas de suministro desmanteladas durante años de cierre. La interconexión eléctrica y gasífera es el proyecto más ambicioso de esta nueva etapa, con el objetivo de intercambiar excedentes energéticos para resolver déficits regionales en ambos lados de la frontera.



MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

Esta integración binacional favorece especialmente al sector agroindustrial y manufacturero de ambos países. Venezuela busca en Colombia un proveedor de materias primas y bienes de capital, mientras que Colombia ve en Venezuela un mercado natural para sus exportaciones y un socio para proyectos energéticos de largo plazo. La tendencia es hacia un modelo de sustitución de importaciones binacional, donde se priorizan los productos de la región frente a los de otros continentes. Esto reduce los costos de transporte y logística, haciendo que los productos finales sean más competitivos para el consumidor local. La frontera se ha vuelto a convertir en el pulmón económico de la región andina.

La décima tendencia económica es la mutación del sistema de crédito hacia modelos no tradicionales ante la persistente restricción de la liquidez bancaria. Los mecanismos de "Compra ahora, paga después" (Buy Now Pay Later) y el crédito comercial directo entre empresas han llenado el vacío dejado por la falta de préstamos bancarios convencionales. Las grandes cadenas de retail y concesionarios de vehículos están utilizando su propio capital de trabajo o fondos de inversión privados para ofrecer financiamiento a sus clientes. Esta tendencia ha dinamizado las ventas de bienes duraderos, que antes eran inaccesibles para la mayoría de la población sin capacidad de ahorro inmediato.

La ingeniería financiera local ha permitido el surgimiento de plataformas tecnológicas que conectan a inversores privados con particulares o pymes que requieren capital. Estas plataformas operan bajo esquemas de préstamos garantizados por activos reales, lo que reduce el riesgo de impago en un entorno volátil. La tendencia es hacia una desintermediación bancaria, donde la tecnología permite una asignación más eficiente del capital disponible. Este mercado de crédito informal o alternativo es, paradójicamente, más ágil que el sistema tradicional, adaptándose rápidamente a las variaciones del tipo de cambio y las necesidades del mercado.



La tendencia es hacia una mayor participación privada en la gestión y mantenimiento de los servicios públicos. El Estado ha comenzado a permitir esquemas de cogeneración eléctrica, donde las empresas privadas pueden invertir

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

en plantas de energía para su propio consumo y verter los excedentes a la red nacional. Este modelo de colaboración público-privada es visto como la vía más rápida para atraer las inversiones multimillonarias necesarias para modernizar el Sistema Eléctrico Nacional. La eficiencia en la prestación de servicios es ahora una prioridad de supervivencia económica, desplazando a la visión de los servicios como bienes exclusivamente estatales y gratuitos.

Los sectores de transporte y telecomunicaciones también enfrentan retos similares. La red vial nacional requiere reparaciones profundas para facilitar el movimiento de mercancías entre los centros de producción y los puertos de exportación. En telecomunicaciones, aunque ha habido un auge en la conectividad por fibra óptica impulsado por el sector privado, todavía existen brechas significativas en la cobertura rural y en la calidad de los servicios en el interior del país. La tendencia es hacia una digitalización acelerada de la economía, pero esta requiere un soporte de infraestructura física sólido y redundante. La inversión en infraestructura es el multiplicador económico por excelencia.

La duodécima tendencia económica es la intensificación de la competencia de bienes importados y la consecuente presión hacia la desindustrialización o la reconversión productiva. El auge de productos provenientes de mercados masivos, especialmente de China y países vecinos, ha inundado el mercado venezolano atraído por una política arancelaria que en muchos casos favorece el consumo inmediato sobre la producción local. Muchos industriales venezolanos denuncian una competencia desleal, ya que deben producir bajo condiciones adversas de servicios públicos e impuestos elevados, mientras que los productos importados ingresan con facilidades logísticas y menores costos de origen. Esta dinámica está forzando un cierre masivo de pequeñas fábricas que no logran competir en precio.

Análisis detallado de las encuestas económicas en Venezuela (Abril 2026)**Análisis de Seijas y Asociados (Delphos): El pulso del poder adquisitivo y las preocupaciones ciudadanas**

El estudio más reciente de Seijas y Asociados, bajo la dirección técnica del estadístico Félix Seijas, ofrece una radiografía profunda de la psique económica del venezolano en este cierre de abril de 2026. La conclusión más contundente del informe es que la economía y,

específicamente, el poder adquisitivo, han desplazado definitivamente a la salud, la seguridad y los servicios públicos como la preocupación central y absoluta del 85,2% de la población. Este dato subraya que, aunque se observan mejoras en los agregados macroeconómicos, la percepción de bienestar individual sigue anclada a la capacidad diaria de cubrir la canasta alimentaria. El venezolano promedio vive en un estado de vigilia financiera constante, donde cualquier fluctuación del tipo de cambio es percibida como una amenaza existencial.

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

Un hallazgo disruptivo de la encuesta Delphos es la caída drástica en el deseo de emigrar, que ha pasado de ser una tendencia masiva a una opción contemplada por menos de un tercio de la población joven. Seijas atribuye este cambio no necesariamente a una resolución de los problemas de fondo, sino a un clima de "expectativa contenida" ante los cambios institucionales y el reinicio de las relaciones con organismos multilaterales. La población parece haber adoptado una postura pragmática de esperar a ver si el nuevo ciclo de inversiones extranjeras se traduce en mejores salarios y estabilidad. Esta tregua social es una ventana de oportunidad crítica para el liderazgo económico, pero también un riesgo latente, ya que una decepción en las expectativas podría reactivar los flujos migratorios con mayor intensidad.



Análisis de Datanálisis: Proyecciones de crecimiento, inversión y confianza del consumidor

La firma Datanálisis, liderada por el economista Luis Vicente León, presenta en su último reporte de abril de 2026 un escenario de optimismo estratégico que ha captado la atención de los centros financieros internacionales. La proyección de crecimiento del PIB de entre el 10% y el 12% para este año se fundamenta en un modelo de recuperación por "rebote de capacidad ociosa" y una inyección masiva de divisas proveniente de las nuevas licencias petroleras. León ha sido enfático en calificar a Venezuela como "la mejor opción de inversión en el mundo en este momento", argumentando que la relación riesgo-beneficio es inmejorable para aquellos capitales que entren antes de la normalización total de las relaciones diplomáticas. Este discurso ha permeado en el 70,5% de la población, que manifiesta sentirse optimista sobre el futuro económico cercano.

Datanálisis segmenta la economía en dos velocidades claramente diferenciadas. Por un lado, los sectores vinculados a la energía, los servicios de lujo, el comercio y la tecnología, que están experimentando una expansión vigorosa y atrayendo inversiones frescas. Por otro lado, la industria tradicional y el sector público, que todavía luchan contra la falta de crédito y los rezagos salariales. El consumo masivo, según la firma, crecerá un 17% este año, impulsado no solo por la mejora de los ingresos en el sector privado, sino también por el aumento de las remesas y la reactivación de los flujos comerciales binacionales con Colombia y Brasil. El mercado

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

venezolano se está convirtiendo en un mercado de nichos, donde la segmentación precisa del consumidor es la clave del éxito empresarial.

Análisis de Hercon Consultores: La brecha entre los indicadores macro y la realidad social



El informe de abril de 2026 de Hercon Consultores ofrece un contrapunto necesario a las cifras de crecimiento, enfocándose en la cruda realidad microeconómica que enfrentan los hogares venezolanos. Según su estudio de campo, el 90,3% de las familias describe su situación financiera actual como de "complejidad extrema". Esta cifra revela una contradicción dolorosa: mientras el PIB crece a tasas de dos dígitos, la mayoría de la población sigue atrapada en una lucha diaria por la supervivencia alimentaria. La inflación de los alimentos, que supera el índice general de precios, es el factor que más castiga a los estratos populares, donde la capacidad de ahorro es nula y los ingresos se destinan en su totalidad a la compra de productos básicos.

Hercon destaca que el costo de la canasta básica alimentaria se ha estabilizado por encima de los 677 dólares mensuales, una cifra que resulta inalcanzable para el 50,5% de los hogares venezolanos. Esta brecha alimentaria es el indicador más fiel de la desigualdad que la recuperación económica ha profundizado. Mientras en las zonas pudientes de las grandes ciudades florece una economía de consumo de lujo, en las provincias y barriadas populares persiste una dieta deficiente y una dependencia crítica de las bolsas de alimentos subsidiadas por el Estado. La recuperación, concluye Hercon, es hasta ahora un fenómeno de élites y de sectores muy específicos de la economía, sin un mecanismo efectivo de goteo hacia la base social.



Sin embargo, el análisis de Bloomberg advierte que este crecimiento es, por el momento, una "recuperación impulsada por choques externos" y no una transformación estructural profunda. La encuesta entre economistas internacionales subraya que Venezuela sigue sufriendo de profundas brechas en infraestructura, financiamiento y productividad laboral. Gran parte del incremento proyectado del PIB responde al uso de la capacidad instalada ociosa que fue acumulada durante una década de contracción brutal. Para que este crecimiento sea sostenible, Bloomberg enfatiza que el país debe avanzar hacia reformas pro-mercado más ambiciosas, incluyendo la eliminación total de los controles de cambio restantes y la adopción de una regla fiscal estricta que prevenga la volatilidad del gasto público.

En el ámbito de la deuda soberana, la encuesta de Bloomberg revela un cambio de sentimiento entre los fondos de cobertura y los inversores institucionales. La posibilidad de una reincorporación formal de Venezuela al Fondo Monetario Internacional ha generado un repunte en el valor de los bonos venezolanos en el mercado secundario. Los inversores están apostando por una reestructuración de la deuda que incluya canjes de activos o pagos garantizados por la producción petrolera futura. Bloomberg señala que el aval de los organismos multilaterales es el paso previo necesario para que Venezuela pueda volver a emitir deuda en los mercados internacionales de capitales. La normalización financiera es el gran catalizador que el mercado está esperando.

PETROLEO Y ENERGIA

El CEO de Chevron, Mike Wirth, ha subrayado recientemente que, si bien los ajustes recientes en la política petrolera venezolana representan un progreso positivo para atraer inversión extranjera, aún se requiere trabajo adicional para alcanzar el nivel de inversión deseable. Wirth destacó en declaraciones a la prensa que la reactivación de la industria no puede ocurrir de manera inmediata, ya que depende de factores complejos como el fortalecimiento de la ingeniería, la reconstrucción de cadenas de suministro, el establecimiento de nuevos contratos y, fundamentalmente, la movilización y retorno de trabajadores calificados que emigraron durante la crisis del sector.



Esta posición refuerza la postura de la compañía sobre la necesidad de reformas legislativas más profundas, como cambios en la Ley de Hidrocarburos, para garantizar la seguridad jurídica necesaria en proyectos de gran envergadura. Mientras Venezuela busca consolidarse nuevamente como un proveedor confiable para el mercado estadounidense bajo la actual administración, el liderazgo de Chevron insiste en que las medidas actuales han sido un paso en la dirección correcta, pero que la recuperación total de la capacidad productiva del país exige un entorno operativo con mayores garantías y estabilidad estructural a largo plazo.

Este miércoles 29 de abril de 2026, la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez lideró la firma de un trascendental Memorándum de Entendimiento con la corporación británica British Petroleum (BP) en la ciudad de Caracas. El acuerdo, suscrito junto al vicepresidente ejecutivo de BP, William Lin, y el director David Campbell, tiene como propósito fundamental la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos gaseosos no asociados en áreas costa afuera, destacando específicamente el potencial de la Plataforma Deltana. Esta alianza estratégica, que contó además con la presencia de la ministra de Hidrocarburos Paula Henao y el presidente de PDVSA Héctor Obregón, busca dinamizar la producción gasífera nacional mediante el aprovechamiento de recursos técnicos avanzados y la reactivación de proyectos de gran escala en el mar territorial venezolano.

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

El convenio se inscribe formalmente en el marco de la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada en enero de 2026, la cual establece un nuevo ecosistema jurídico diseñado para incentivar el flujo de capital extranjero y otorgar mayores garantías operativas a las empresas licenciatarias. Según lo expresado por la Presidenta Encargada, este paso representa un avance significativo en la consolidación de una política de apertura que busca la normalización de las relaciones comerciales internacionales bajo un esquema de beneficio compartido. La participación directa de una firma global de la magnitud de BP no solo valida el nuevo marco regulatorio implementado tras el fallo institucional del 4 de enero, sino que proyecta a Venezuela como un actor clave y confiable para la seguridad energética regional en los próximos años.

Los desafíos para que la Ley de Hidrocarburos genere confianza y mejore los ingresos petroleros

La reciente aprobación de la **Ley de Hidrocarburos** se posiciona como un avance normativo que busca atraer los **100.000 millones de dólares** necesarios en la próxima década para recuperar los niveles históricos de producción de 4 millones de barriles diarios. No obstante, expertos del IESA y de la Universidad Rice advierten que este marco legal es apenas un paso de transición que requiere ser complementado con reglamentos específicos, modelos de contrato robustos y la creación de una agencia regulatoria independiente. Mientras que la rehabilitación de pozos existentes bajo infraestructura actual podría elevar la producción hacia los 1.5 millones de barriles en un plazo de tres años, los proyectos de gran envergadura o *greenfields* demandan una estabilidad jurídica y política de largo alcance que aún no se consolida plenamente en el horizonte nacional.

El camino hacia esta recuperación enfrenta obstáculos estructurales severos, destacando una **deuda acumulada de PDVSA** que asciende a 35.000 millones de dólares, dentro de un compromiso total de la República que supera los 170.000 millones. A esto se suma el complejo escenario de las sanciones internacionales, dado que el 40% de la producción actual está vinculada a empresas rusas, chinas o contratos de participación sin licencias estadounidenses, lo que limita significativamente el flujo inmediato de capital. Gigantes como Exxon y Conoco han supeditado su ingreso a una claridad legal absoluta, pues sus inversiones exigen periodos de maduración de hasta 30 años, lo cual resulta inviable sin garantías de transición política y una resolución definitiva sobre activos estratégicos como Citgo.

Perspectiva de Chevron sobre la industria petrolera venezolana

Mike Wirth, CEO de Chevron, ha emitido declaraciones críticas sobre la viabilidad de una recuperación a gran escala de la producción petrolera en Venezuela. Wirth enfatiza que el incremento de la producción no es un proceso inmediato, sino que requiere una reconstrucción profunda de la ingeniería, las cadenas de suministro y, fundamentalmente, el retorno de la mano de obra calificada que ha emigrado del país. Esta visión coincide con planteamientos de la oposición y condiciona el éxito de la reciente Ley de Hidrocarburos no solo a cambios normativos, sino a una inversión estimada de 100 mil millones de dólares en una década y a una transformación institucional que genere confianza real en el mercado internacional, subrayando que, aunque un aumento en la producción beneficiaría la fiabilidad energética de EE. UU., los obstáculos operativos actuales son estructurales y de difícil resolución a corto plazo.

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

Dinámicas Operativas y Estadísticas

Al cierre del cuarto mes de 2026, la industria petrolera de Venezuela exhibe una trayectoria de estabilización técnica tras las profundas transformaciones administrativas iniciadas a principios de año. Los indicadores de producción reportados a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reflejan un incremento sostenido durante el primer trimestre, consolidando una tendencia al alza que busca recuperar los niveles históricos de extracción en el corto plazo. Según las cifras oficiales más recientes, el bombeo de crudo alcanzó los 1.095.000 barriles por día (bpd) en marzo de 2026, lo que representa un aumento del 7,2% en comparación con los 1.021.000 bpd registrados en febrero.

Análisis Regional de la Producción y Capacidad Instalada

La mayor parte de la producción actual se concentra en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde se estima la existencia de reservas probadas superiores a los 300.800 millones de barriles. No obstante, el factor de recobro o tasa de recuperación se mantiene en niveles históricamente bajos, oscilando entre el 4% y el 9%. Esta limitación técnica se debe a la naturaleza viscosa y densa del crudo extrapesado, cuya extracción requiere de tecnologías avanzadas de inyección de vapor y el uso intensivo de diluyentes.

La Visión del Nuevo Encargado de Negocios y el Secretario de Energía

El Secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, durante una reciente visita a las instalaciones operadas por Chevron en la Faja del Orinoco, declaró que el embargo petrolero ha terminado en la práctica y que la cooperación energética binacional es "inmensa". Por su parte, el nuevo encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, John Barret, ha enfatizado que la reconstrucción del sector es la piedra angular para la estabilidad económica regional.

Barret ha supervisado la implementación de mecanismos de pago controlados, donde una parte de los ingresos por ventas de petróleo a refinerías estadounidenses (estimados inicialmente en 300 millones de dólares) se destina a la estabilización del mercado interno y la protección del poder adquisitivo nacional. Bajo este esquema, Estados Unidos mantiene una supervisión indefinida sobre los flujos de recursos para asegurar que se utilicen exclusivamente en la modernización de la industria y servicios básicos.

Crisis del Sector Eléctrico Nacional

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) atraviesa su momento más crítico, caracterizado por una fragilidad estructural que afecta la continuidad de las operaciones industriales y petroleras. Al 28 de abril de 2026, el SEN depende en un 78% de la generación hidroeléctrica, centrada casi exclusivamente en el complejo del Bajo Caroní.

SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO

Seguridad jurídica y la realidad operativa



El abismo para cualquier inversionista serio. Los casos de Bangente y el Casino Grand CCCT no son eventos aislados, sino la manifestación de un modelo de "expropiación judicial" donde el Estado de derecho ha sido sustituido por la voluntad de un círculo de poder con nombres y apellidos. La captura de Bangente por parte de Erick Malpica Flores, ejecutada bajo una presión asfixiante contra los hermanos D'Gracia, demuestra que ni siquiera el sector financiero, tradicionalmente resguardado por regulaciones estrictas, es inmune a la voracidad de la cúpula. Esta maniobra, que se suma al despojo del Casino del CCCT orquestado por Raúl Gorrín y Ronny El Asmar mediante sentencias amañadas contra Itamar Paraguacuto, envía un mensaje de terror institucional: en Venezuela, la propiedad es un derecho precario que caduca en el momento en que un "chavista pesado" decide que su rentabilidad le pertenece.



Vicios en el sistema judicial y crisis de derechos humanos

La Vicepresidenta Delcy Rodríguez ha reconocido públicamente la persistencia de "vicios y desviaciones" en el sistema judicial venezolano, una admisión que ocurre en medio de denuncias graves sobre la comercialización de la justicia. Investigaciones periodísticas revelan un esquema de "Mapas de Poder" donde jueces exigen sumas exorbitantes de dólares o incluso ganado para decidir sobre la libertad de los ciudadanos. Paralelamente, organizaciones como Tal Cual y Naciones Unidas denuncian la falta de respuesta institucional ante casos de desaparición forzada de presos políticos como Hugo Marino Salas y Juan Hurtado Campos. Este escenario de opacidad se extiende a la designación de

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

magistrados del TSJ, generando un profundo escepticismo entre defensores de derechos humanos sobre la voluntad real de ejecutar una reforma judicial efectiva.

El pronunciamiento de *La Gran Aldea* subraya una advertencia crítica sobre la integridad constitucional de Venezuela, señalando que la jerarquía del Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe residir exclusivamente en la figura del Presidente electo por la voluntad popular. Este análisis resalta que la desvinculación entre el mando militar y el mandato electoral no constituye simplemente una irregularidad administrativa o un tecnicismo legal, sino una ruptura fundamental con el orden democrático que pone en riesgo la soberanía civil. Al debilitar el principio de subordinación de las armas al poder civil, se genera un vacío institucional que facilita la discrecionalidad política de los estamentos castrenses, desdibujando la frontera entre la defensa de la nación y el ejercicio del gobierno.

La tesis central de este planteamiento es que permitir la autonomía de las fuerzas militares frente al electorado equivale a una sustitución de la legitimidad de las urnas por la fuerza coercitiva de las armas. En un entorno político marcado por la alta tensión, esta alerta busca sensibilizar a la opinión pública sobre las implicaciones de normalizar una estructura de mando que ignora la secuencia democrática. Para los analistas, insistir en la preeminencia del voto no es solo una defensa teórica de la Constitución, sino una medida de seguridad necesaria para evitar que Venezuela derive hacia un sistema donde la fuerza sustituya al diálogo político como mecanismo de resolución de conflictos y toma de decisiones estratégicas.

Evaluación

El entorno de seguridad ciudadana y orden público en la República Bolivariana de Venezuela, durante el ciclo comprendido entre el 23 y el 28 de abril de 2026, se caracteriza por una fase de reconfiguración institucional profunda bajo un esquema de tutela externa y reordenamiento del sistema de justicia. Tras los eventos críticos que marcaron el inicio del año, el aparato de seguridad del Estado ha transitado hacia un modelo que combina la doctrina tradicional de los Cuadrantes de Paz con una supervisión técnica internacional y un proceso de depuración judicial sin precedentes. Este periodo analizado es fundamental para comprender la transición desde un estado de excepción prolongado hacia una fase de estabilización donde el control territorial, la desarticulación de mafias carcelarias y la cooperación militar fronteriza con Colombia se han erigido como las prioridades estratégicas del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Sucesos y eventos críticos

La dinámica de sucesos durante la última semana de abril de 2026 refleja un patrón de incidencias donde la siniestralidad vial de alta letalidad y los conflictos dentro del sistema penitenciario han dominado la agenda de orden público.

Uno de los hitos más relevantes del periodo fue la cuarta sesión del juicio por la trama de corrupción denominada PDVSA-Cripto, celebrada el 28 de abril. Este evento implicó un despliegue masivo de seguridad para el traslado de los 64 acusados, representando un desafío logístico para el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) en la ciudad de Caracas.¹ La

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

gestión de este juicio no solo es un asunto judicial, sino un evento de orden público de alta sensibilidad debido a la jerarquía de los implicados y el potencial de perturbación que conllevan los traslados masivos de detenidos de alto perfil.



En el ámbito penitenciario, el 23 de abril se consolidó el reporte de una crisis en el Internado Judicial Yare III. Un motín generado por riñas colectivas resultó en la muerte de cinco reclusos, evidenciando que, a pesar de los anuncios gubernamentales sobre el saneamiento del sistema penal, las estructuras de control interno siguen siendo porosas. Las familias y defensores de derechos humanos habían reportado irregularidades desde el fin de semana previo, lo que sugiere una falla en los mecanismos de alerta temprana de los servicios de inteligencia penitenciaria.

**Gestión ministerial y directrices estratégicas**

La administración del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP) durante este periodo ha estado marcada por la figura de Diosdado Cabello, quien ha integrado su rol ministerial con una movilización política denominada Gran Peregrinación por una Venezuela sin Sanciones y en Paz. Este despliegue no ha sido meramente retórico; ha funcionado como un mecanismo de supervisión territorial donde el ministro ha evaluado de primera mano la operatividad de los organismos de seguridad en estados estratégicos como Portuguesa y Mérida. El 24 de abril, desde Portuguesa, Cabello enfatizó la necesidad de fortalecer el Motor Agroindustrial mediante la protección activa de

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

las unidades de producción, instruyendo a las policías estatales y municipales a integrarse en planes de vigilancia rural para prevenir el robo de insumos y ganado.

Las directrices emitidas desde el despacho ministerial el 23 de abril subrayaron dos prioridades: el saneamiento acelerado del sistema penal y la desarticulación de las mafias que aún operan en las estructuras periféricas de los centros de detención. Esta orden operativa busca erradicar los remanentes de las estructuras de pronato mediante una rotación de custodios y la implementación de sistemas de inteligencia interna más rigurosos. Asimismo, el ministerio ha impulsado la reforma de la justicia penal, instalando comisiones para una consulta nacional que busca democratizar el acceso al sistema judicial y reducir los tiempos de respuesta procesal, una medida que intenta mitigar el descontento social generado por el retardo procesal histórico.



Cronología operativa y despliegues tácticos policiales

La operatividad policial entre el 23 y el 28 de abril de 2026 ha seguido un cronograma estricto de intervenciones focalizadas y despliegues preventivos. La estrategia se ha alejado de los masivos Operativos de Liberación del Pueblo (OLP) del pasado — ampliamente criticados por su impacto negativo en los derechos humanos — para adoptar un enfoque de precisión basado en inteligencia social y técnica.

El 24 de abril se ejecutó un operativo táctico de gran relevancia en el municipio García de Hevia, estado Táchira. La División Contra Drogas de la CPNB desarticuló una red de microtráfico que operaba dentro de un asentamiento indígena. Este procedimiento, originado por denuncias ciudadanas, culminó con la incautación de 6.04 kilogramos de sustancias (cocaína y marihuana) y la captura de 14 individuos pertenecientes a una banda organizada.⁵ Este evento es significativo porque demuestra la capacidad de la PNB para operar en entornos culturalmente sensibles y zonas de frontera bajo protocolos de respeto a la movilidad humana.

El 25 de abril, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) reforzó su presencia en los Puntos de Atención al Ciudadano (PAC) en las zonas limítrofes. En el PAC Peracal, mediante el uso de inteligencia antinarcóticos, se detectó un cargamento de 21,200 pastillas de cocaína sintética ocultas en un vehículo de transporte público. La precisión

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

técnica del decomiso, que contó con el apoyo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) para el peritaje químico, resalta una mejora en los sistemas de detección y control fronterizo.

Cronológicamente, el 27 de abril se observó un despliegue masivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR). Ante las precipitaciones registradas en la región central, funcionarios de Zoedan Aragua realizaron evaluaciones técnicas en la Carretera Nacional El Junquito tras deslizamientos de tierra en el sector Cucurucho. La intervención inmediata permitió establecer protocolos de seguridad para el flujo vehicular y coordinar con las alcaldías locales las labores de despeje de vía, evitando colapsos mayores en esta arteria crítica para el abastecimiento de la capital.⁵ Ese mismo día, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) inició un despliegue de operativos vehiculares en Sucre, Bolívar, Lara y Táchira, orientados a la regularización de documentos y la inspección técnica de flotas de carga, una medida táctica para reducir la incidencia de accidentes viales.

Cooperación e influencia internacional

Fuentes de inteligencia con acceso a las estructuras militares venezolanas confirman la existencia de una arquitectura de seguridad paralela y bicéfala en el país. **(HIS)** Por un lado, se proyecta una fachada de normalización institucional hacia Occidente, permitiendo un acceso gradual y coordinado del personal estadounidense a áreas logísticas y administrativas del SEBIN y la DGCIM. Por otro lado, se mantiene un núcleo operativo y tecnológico hermético, controlado directamente por asesores de Rusia, Irán y China.

Toda esta estructura dual es coordinada por Diosdado Cabello en su rol de Ministro del Interior, quien ha ordenado mantener un perfil bajo frente a las inspecciones norteamericanas, ocultando sistemáticamente las capacidades reales de interceptación y los vínculos con estas potencias extracontinentales. **(HIS)**

Esta compleja red de seguridad es el resultado de más de dos décadas de alianzas estratégicas. Tras la influencia formativa inicial de la inteligencia cubana, la cooperación se sofisticó hacia el ámbito tecnológico y militar. Rusia, amparada en un tratado estratégico firmado en 2025, provee sistemas de interceptación de comunicaciones, plataformas de ciberinteligencia y armamento antiaéreo. China, a través de la empresa CEIEC, suministra la infraestructura de vigilancia masiva, incluyendo radares y la red de cámaras VEN911, la cual experimentó un crecimiento acelerado a finales de 2025. Irán, por su parte, aporta tecnología de drones de vigilancia aérea y doctrina operativa para el control de movilizaciones civiles. Todo este engranaje se encuentra vedado para los representantes estadounidenses, configurando una estricta compartimentación donde solo se les permite interactuar en la capa más superficial del sistema de inteligencia.

La estrategia de compartimentación de tres niveles permite al Estado venezolano ceder la visibilidad justa para evitar una confrontación directa con Washington, mientras conserva intacto su poder real de control social. Gestos como la reciente disolución formal del Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA) en febrero de 2026 representan simples movimientos en el tablero político visible, sin que esto implique un desmantelamiento de las redes operativas subyacentes. La infraestructura de vigilancia masiva, que incluye el ciberpatrullaje, el reconocimiento facial y el uso de aplicaciones

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

digitales para la delación ciudadana, sigue funcionando de manera continua y permanente, apoyada y operada en gran medida por los actores rusos y chinos.

Esta dinámica presenta profundas implicaciones y riesgos estratégicos, destacando un entorno de contrainteligencia sumamente frágil debido a la presencia simultánea de asesores de potencias antagónicas. Cualquier filtración que exponga esta compartimentación técnica podría revertir abruptamente los avances diplomáticos con Estados Unidos. Asimismo, la consolidación de una transición política enfrenta obstáculos críticos, siendo Cabello la variable más determinante; su control sobre los servicios de inteligencia y su situación legal pendiente en el exterior suponen un riesgo constante de sabotaje interno si no se resuelve su estatus. Adicionalmente, la cooperación iraní opera bajo una lógica autónoma que representa un legado de capacidades asimétricas e infraestructura capaz de sobrevivir a cualquier cambio en la cúpula del gobierno.

Análisis

La situación de seguridad y justicia en Venezuela es objeto de análisis divergentes por parte de los principales criminólogos y centros de pensamiento. Se identifican cuatro corrientes de opinión fundamentales que definen la narrativa técnica actual:

La primera perspectiva, sostenida por analistas que siguen la tendencia de la reducción de la violencia delictiva, resalta que Venezuela ha experimentado un desplome en las tasas de homicidios. Según reportes del Wall Street Journal y criminólogos locales, el país ha pasado de cifras de violencia extrema (más de 90 homicidios por cada 100,000 habitantes) a una situación donde la delincuencia común parece haberse "evaporado" debido a la migración masiva de delincuentes y a la efectividad de la doctrina de Cuadrantes de Paz. Esta visión destaca que la sensación de seguridad en las calles ha permitido una recuperación del uso de los espacios nocturnos por parte del 60% de la población.

La segunda visión, representada por expertos como Luis Izquier y Fermín Mármol García, es más cautelosa y técnica. Argumentan que, si bien el delito callejero puede haber disminuido, el crimen organizado ha mutado hacia formas más sofisticadas de control territorial y económico. Denuncian que la "impunidad como norma" sigue vigente, con un 99% de los crímenes sin resolver, y que las bandas criminales en zonas rurales poseen un armamento superior al de las policías regionales, lo que les permite desafiar la autoridad del Estado de manera frontal. Para estos expertos, Venezuela ha transitado una "revolución de la muerte" donde la destrucción de la institucionalidad ha dejado el camino libre para que el delito organizado sustituya la ley.

La tercera narrativa proviene de organismos de derechos humanos como PROVEA y el Monitor de Fuerza Letal. Sus informes técnicos para abril de 2026 sostienen que la reducción de los índices de criminalidad es, en parte, el resultado de una política de "letalidad policial" sistemática. Señalan que aproximadamente una tercera parte de los homicidios en el país son cometidos por las propias fuerzas de seguridad, con cuerpos como las FAES (o sus sucesores en la PNB) siendo responsables de una proporción alarmante de las muertes en barriadas populares como Petare y La Vega. Denuncian patrones de ejecuciones, allanamientos sin orden judicial y una "necropolítica" donde el Estado utiliza la fuerza letal como herramienta de control social primario.

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

Finalmente, una cuarta opinión se centra en la dimensión judicial y política. Analistas observan que los cambios profundos en el TSJ iniciados el 21 de abril, orientados a renovar el 70% de los magistrados, son una maniobra de la actual vicepresidencia para consolidar su poder sobre el sistema de justicia y reducir la influencia de facciones políticas previas. Esta reforma, aunque presentada como un clamor popular por una "justicia imparcial", es vista como una herramienta para garantizar la impunidad de la nueva élite gobernante mientras se procesa a actores de la administración anterior bajo cargos de corrupción.

**Despliegues tácticos y la operatividad del sistema de justicia**

La actuación de los tribunales de control y el Ministerio Público durante la semana del 23 al 28 de abril ha estado marcada por la aplicación de la Ley de Amnistía y el procesamiento de casos de corrupción. El 23 de abril, la presidencia encargada anunció la conclusión de la aplicación de la Ley de Amnistía con un saldo de 8,616 libertades otorgadas, aunque organizaciones no gubernamentales advierten que entre 400 y 600 casos de presos políticos y civiles detenidos por orden público no fueron beneficiados por la medida.

Los tribunales de control han operado con una capacidad de respuesta acelerada para legalizar las detenciones realizadas en operativos antidrogas y de orden público. Por ejemplo, los 14 detenidos en el operativo de Táchira el 24 de abril fueron presentados inmediatamente ante las fiscalías correspondientes, demostrando una coordinación fluida entre la PNB y el Ministerio Público para evitar el vencimiento de los lapsos legales.

En cuanto a la capacidad de respuesta de las unidades de control de manifestaciones y motines, el manejo del incidente en Yare III demostró una capacidad técnica mixta. Si bien se logró contener el motín y evitar una fuga masiva, la pérdida de cinco vidas humanas indica fallas en los protocolos de mediación y en el uso de armas no letales para el control de disturbios internos. Las unidades de control de manifestaciones de la PNB se mantienen en un estado de despliegue preventivo en las principales ciudades, apoyadas por sistemas de monitoreo aéreo que permiten dispersar focos de alteración del orden público antes de que escalen a conflictos mayores. La reforma judicial en curso, que incluye la creación de una comisión para la consulta nacional, busca precisamente canalizar las demandas de justicia a través de vías institucionales para reducir la presión social sobre las fuerzas de seguridad ciudadana.

MILITAR

Este periodo de análisis, comprendido entre el 23 y el 29 de abril, se caracteriza por una calma tensa, la consolidación de la tutela militar estadounidense en nodos estratégicos como Fuerte Tiuna y un esfuerzo administrativo por parte del nuevo alto mando para mantener la cohesión de una tropa desmoralizada y técnicamente disminuida.



Gestión y Actividades del Ministro de la Defensa

El General en Jefe Gustavo González López, cuya trayectoria está profundamente ligada a los aparatos de inteligencia y contrainteligencia como el SEBIN y la DGCIM, ha enfocado su gestión en esta fase de transición hacia la "pacificación interna" y el control de daños institucionales. Durante la semana del 23 al 29 de abril de 2026, sus actividades han estado marcadas por un pragmatismo forzado, operando bajo la sombra de asesores militares de Estados Unidos que han asumido roles de supervisión en los centros de mando más importantes del país.

El 23 de abril, González López sostuvo reuniones de alto nivel con el Estado Mayor Conjunto para evaluar el despliegue del apresto operacional en las zonas fronterizas, específicamente en el estado Táchira y el eje del Catatumbo. Esta actividad coincidió con las declaraciones del encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, quien reafirmó la implementación de un plan de tres fases liderado por Washington para estabilizar el territorio nacional. La presencia de González López en estos encuentros simboliza el puente administrativo entre la vieja guardia y la nueva realidad de tutela externa, enfocándose en evitar deserciones masivas y focos de

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

insurrección dentro de los batallones de infantería mecanizada y unidades blindadas que aún mantienen cierta capacidad operativa.

El 24 de abril, el Ministro encabezó los actos conmemorativos del 216.º aniversario del Ministerio de la Defensa. En un discurso que omitió las tradicionales consignas de "Patria o Muerte", González López se centró en la "lealtad institucional" y el compromiso con la paz social, un giro narrativo necesario para amalgamar a una oficialidad que ha visto cómo sus principales mandos fueron pasados a retiro por órdenes directas de la administración Trump. Durante la jornada, se emitieron directrices para la revisión de los expedientes de personal, un proceso de depuración que busca identificar a oficiales con vínculos estrechos con las economías ilegales que florecieron bajo el mando anterior.

Hacia el final de la semana, específicamente el 27 de abril, el Ministro centró su agenda en la dotación de la Red de Salud Militar. Esta actividad, lejos de ser un mero acto administrativo, es una maniobra táctica de control de bienestar; el suministro de equipos e insumos médicos a los hospitales militares busca mitigar el descontento de la tropa y los oficiales subalternos, quienes han sufrido el colapso logístico derivado del conflicto de enero. La entrega de estos suministros fue presentada como parte del "Reto Admirable 2026", un plan que busca elevar la capacidad científica y moral de la FANB frente a los desafíos de la reconstrucción nacional.

Aviación Militar Bolivariana

La flota aérea de la FANB es, en la práctica, simbólica. De los cazas Sukhoi Su-30MK2, se estima que menos de la mitad son capaces de volar, y una fracción aún menor está en condiciones de combate real. La falta de repuestos críticos y la ausencia de soporte técnico ruso han dejado a estas aeronaves ancladas en las bases de Barcelona y Maracay. Los F-16, aunque mantienen una operatividad marginal de 3 a 4 unidades, carecen de los sistemas modernos de aviónica necesarios para enfrentar a cazas de quinta generación como el F-35A o el F-22 Raptor que patrullan las costas venezolanas. Las pistas y hangares de La Carlota fueron severamente dañados por municiones de precisión, inhabilitando esta base como punto de despliegue estratégico en el centro del país.

Defensa Antiaérea y Guerra Electrónica

Los sistemas S-300VM (Antey-2500) y Buk M2E fueron neutralizados mediante una combinación de ataques cinéticos y guerra electrónica masiva. El uso de aviones de

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

interferencia EA-18G Growler permitió "cegar" los radares venezolanos, mientras que misiles aire-tierra y drones kamikaze destruyeron las lanzadoras en los primeros minutos de la incursión de enero. En la actualidad, la defensa aérea se limita al uso de MANPADS Igla-S distribuidos en unidades de infantería, los cuales, aunque efectivos contra drones de baja cota, son insuficientes para establecer una zona de exclusión aérea frente a la tecnología estadounidense.

Blindados y Componente Terrestre

El Ejército Bolivariano mantiene sus unidades blindadas compuestas por tanques T-72B1V y vehículos BMP-3 en sus guarniciones, pero su despliegue operativo está limitado por la escasez de combustible y la ruptura de las cadenas logísticas. Durante la semana del 23 de abril, no se registraron maniobras masivas de blindados; la actividad se limitó a patrullajes fronterizos de infantería ligera y unidades de caballería motorizada para contener la actividad de bandas criminales y disidencias guerrilleras. La Milicia Nacional Bolivariana, aunque numéricamente superior, carece de armamento pesado y formación táctica, quedando relegada a tareas de vigilancia comunitaria y apoyo logístico de bajo impacto.

Análisis de Opinión de Expertos y Perspectivas Estratégicas

A continuación, se presentan dieciséis párrafos extensos que desarrollan las visiones de cuatro analistas clave sobre la transformación de la FANB y el nuevo paradigma de seguridad regional tras el cambio de régimen y la intervención extranjera.

José Gustavo Arocha: La Traición Institucional y la Arquitectura del Control

La caída estrepitosa de la estructura de mando el 3 de enero de 2026 no fue un accidente táctico, sino la consecuencia inevitable de una traición institucional que se gestó durante más de dos décadas mediante la construcción de un sistema de control paralelo. Este sistema fue diseñado específicamente para impedir cualquier respuesta militar conjunta, priorizando la desconfianza horizontal entre las unidades para asegurar que ningún oficial pudiera rebelarse sin ser detectado o neutralizado por sus propios pares. En Venezuela, la identidad castrense fue

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

sacrificada en el altar del patronazgo político, donde los ascensos no respondían al mérito o a la capacidad de combate, sino a la lealtad verificada hacia una facción específica. El resultado fue una parálisis institucional por diseño; el sistema logró que la complicidad de unos pocos fuera suficiente para inmovilizar a la gran mayoría de la oficialidad, que hoy se encuentra huérfana de liderazgo y con una moral destruida.

La reconstrucción de la Fuerza Armada bajo la administración provisional enfrenta el obstáculo de que, aunque el líder ha caído, el engranaje de control paralelo sigue intacto en gran medida dentro de los cuarteles. Los colectivos no han sido desarmados, la Milicia no ha sido desactivada y los archivos de la DGCIM, cargados de información comprometedor sobre miles de oficiales, siguen siendo utilizados como herramientas de chantaje por quienes aún custodian esas sombras. Es un error peligroso asumir que la remoción de las cabezas visibles equivale a la desaparición de un sistema que fue planificado con precisión para sobrevivir al cambio político. Un Teniente Coronel en una unidad fronteriza sigue recibiendo órdenes que debe tamizar a través del miedo a la represalia interna, independientemente de lo que diga el nuevo reglamento o de la presencia de asesores extranjeros en Caracas.

John Griffiths-Guerra de Quinta Generación

La Operación Resolución Absoluta ha marcado el inicio de una era de inestabilidad estratégica en América Latina, caracterizada por la competencia entre grandes potencias y el retorno de la intervención directa como herramienta de política exterior. El ataque militar a objetivos terrestres en Venezuela, ejecutado mediante una combinación quirúrgica de fuerzas especiales y bombardeos de precisión, neutralizó el sistema de mando y control del Estado en cuestión de minutos, demostrando una superioridad tecnológica abrumadora. Este escenario no solo afectó la soberanía venezolana, sino que alteró el equilibrio regional, obligando a países vecinos como Colombia y Brasil a reforzar sus fronteras ante el riesgo de una desestabilización prolongada o una nueva ola de refugiados. La operación fue una manifestación clara de la reciente estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que ha relanzado la Doctrina Monroe para contrarrestar la influencia de potencias extrarregionales en el hemisferio occidental.

Clima Interno y Situación de la Tropa en los Cuarteles

El ambiente que se respira en las unidades militares entre el 23 y el 29 de abril de 2026 es de una tensa espera y resignación. La oficialidad subalterna y la tropa alistada enfrentan una crisis de identidad profunda, tras haber sido formados en una doctrina antiimperialista que se desmoronó en menos de un mes ante la intervención estadounidense. Los relatos de los sobrevivientes de los ataques de enero, que describen el uso de armas especiales —posiblemente sónicas o de

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

microondas— que causaron colapsos físicos y desorientación masiva, han generado un sentimiento de indefensión tecnológica en los cuarteles.

La moral se encuentra minada no solo por la derrota militar, sino por las condiciones de vida precarias. A pesar de los esfuerzos del Ministro González López por dotar a la Red de Salud Militar, la falta de suministros básicos y la incertidumbre sobre el pago de salarios en una economía en transición mantienen el descontento en niveles críticos. Existe un temor generalizado a las purgas internas, ya que la DGCIM, ahora bajo una dirección que responde a los intereses de la administración provisional y sus aliados, ha iniciado interrogatorios para identificar a posibles "células de resistencia" dentro de los batallones.

Degradación de las FANB a funciones de meseros o actores de protocolo. La transformación del cruce de sables —un ritual que simboliza la unión indisoluble entre el oficial y su mando— en un servicio de banquetería civil representa la culminación de la mercantilización del honor militar. Este fenómeno beneficia primordialmente a una estructura dual de intermediarios: por un lado, empresas de protocolo vinculadas a sectores de la "nueva élite" que venden la estética del poder castrense como un accesorio de lujo para validar su estatus social; y por otro, a los mandos medios y superiores de las academias que, bajo una lógica de "contratistas informales", permiten el uso de cadetes y uniformes reglamentarios a cambio de divisas. Al convertir al cadete en un activo de alquiler, se destruye la mística de la formación y se reemplaza por una relación de servidumbre comercial. Los beneficiarios no solo obtienen réditos económicos inmediatos, sino que consolidan un sistema donde la simbología del Estado está a la venta del mejor postor, despojándola de su carácter sagrado y republicano para convertirla en simple escenografía para el consumo privado.

Desde una perspectiva estratégica, este deterioro de la FANB no es una consecuencia accidental, sino una herramienta de control político que beneficia directamente al mantenimiento del *statu quo*. Al permitir que el personal en formación se degrade a funciones de meseros o actores de protocolo, el alto mando garantiza la ruptura definitiva de la ética profesional. Un cadete que aprende que su uniforme y su sable tienen un precio de mercado es un oficial que, en el futuro, no responderá a la Constitución ni al deber nacional, sino a quien pueda financiar sus necesidades o caprichos. Esta "mercenarización" de la fuerza joven asegura que la institución no actúe como un cuerpo cohesionado con valores institucionales, sino como una amalgama de individuos dependientes del "rebusque" y de lealtades transaccionales. El beneficio final es para el poder político, que prefiere una fuerza armada desmoralizada y fragmentada, más ocupada en la subsistencia económica que en el apresto operacional o la defensa de la soberanía, eliminando así cualquier posibilidad de una reserva moral interna que pueda cuestionar el rumbo del país.

INTERNACIONALES

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro

La reciente cumbre estratégica en Caracas entre Delcy Rodríguez y el mandatario colombiano Gustavo Petro marca un punto de inflexión en la política exterior venezolana, centrada ahora en la reactivación de la interconexión eléctrica como una medida de auxilio técnico ante el colapso del sistema nacional. Este acuerdo busca canalizar el excedente de generación eléctrica de Colombia para estabilizar el flujo en el occidente venezolano, específicamente en estados como Zulia y Táchira, donde la desinversión estructural ha hecho de los apagones una constante insoportable. Para el Ejecutivo nacional, esta alianza no solo representa un respiro operativo ante el riesgo de estallidos sociales en la frontera, sino que también intenta proyectar una imagen de normalización institucional que utiliza la infraestructura colombiana como una "prótesis" para compensar la incapacidad de generación interna que hoy limita cualquier posibilidad de crecimiento económico real.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha alzado la voz en defensa de la soberanía de Panamá ante lo que calificó como tácticas de intimidación por parte de China. La tensión, que ha escalado en las últimas semanas, se centra en el hostigamiento, las demoras injustificadas y la detención de buques con bandera panameña en puertos chinos, una medida que Washington vincula directamente con una decisión judicial reciente de las autoridades panameñas sobre la gestión de sus puertos estratégicos. Ante este escenario, Rubio ha sido enfático al señalar que cualquier intento externo de socavar la soberanía panameña representa no solo un ataque directo a una nación aliada, sino una amenaza colectiva para la estabilidad del comercio internacional y la seguridad regional, subrayando la importancia estratégica del país centroamericano en el tablero geopolítico actual.

Esta firme postura estadounidense busca contrarrestar las presiones que el régimen chino ha ejercido sobre la infraestructura marítima panameña, afectando la fluidez de las cadenas de suministro globales y elevando los costos para empresas y consumidores a nivel mundial. Al respaldar a Panamá, el gobierno de los Estados Unidos no solo refuerza su alianza económica y de seguridad con un socio confiable, sino que también envía un mensaje claro a Pekín sobre las consecuencias de utilizar la coacción comercial como herramienta política. Con este precedente, Rubio reafirma la posición de Washington de no permitir que la soberanía de un país clave sea utilizada como moneda de cambio o rehén de intereses estratégicos extranjeros, manteniendo la protección de la integridad panameña como una prioridad indiscutible de su política exterior en la región.

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

Fuentes de inteligencia pudieron corroborar la denuncia de una estrategia de propaganda del chavismo en el País Vasco, liderada por Glenna Cabello, cónsul de Venezuela en Bilbao y hermana de Diosdado Cabello. La investigación destaca que, bajo la fachada de «actos culturales», se encubre una agenda política que involucra a actores con pasados vinculados a organizaciones armadas y que busca blanquear la imagen de un régimen marcado por la violación de derechos humanos. Este despliegue no solo busca ocupar espacios públicos democráticos, sino que también implica la exportación de un lenguaje de odio e intimidación —como el uso del término «escuálido»— que amenaza directamente a la diáspora venezolana que reside en España.

Ante esta situación, el documento exige una respuesta contundente por parte de las autoridades españolas, instando al cese de la visibilidad política e institucional de la funcionaria venezolana en territorio vasco. Se cuestiona la complicidad entre antiguos refugiados vascos en Venezuela y el aparato diplomático chavista, enfatizando que el espacio cívico europeo no debe convertirse en una plataforma para el amedrentamiento ni para la legitimación de causas manchadas por la ruina y la persecución. La exigencia final apunta a una revisión de la política exterior venezolana, solicitando incluso la responsabilidad política del canciller Yván Gil por financiar este tipo de acciones de hostigamiento en el extranjero.

El análisis de Yovanni Díaz Carballo sobre la postura del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, respecto a la situación en Cuba, pone de relieve una comprensión profunda de las dinámicas de poder que afectan a la isla. Según Díaz Carballo, la capacidad de Rubio para conectar con la realidad cubana, tanto histórica como contemporánea, es fundamental para entender el endurecimiento de la política exterior estadounidense hacia La Habana. Este posicionamiento se ve respaldado por las recientes denuncias del Departamento de Estado, que acusan al régimen cubano de permitir que potencias adversarias operen centros de inteligencia en su territorio, lo cual ha intensificado las tensiones diplomáticas. Para el analista, este escenario no es sino la consecuencia inevitable de años de una crisis estructural acumulada que, bajo la visión del actual equipo diplomático estadounidense, requiere de un cambio radical y no meramente cosmético en el sistema de gobierno cubano para avanzar hacia cualquier reforma económica sostenible.

BREVES INFORMATIVOS

- La Asociación Bancaria de Venezuela reportó una reunión fructífera con el Banco Central para coordinar la liquidez del mercado cambiario durante el segundo trimestre del año.
- Expertos financieros prevén que el flujo extraordinario de divisas permitirá reducir la brecha entre el dólar oficial y el paralelo a niveles inferiores al cinco por ciento.
- Empresas de corretaje de seguros internacionales evalúan su regreso al mercado venezolano atraídas por la dolarización del sector y el aumento en la demanda de pólizas corporativas.
- El Índice Bursátil de la Bolsa de Valores de Caracas mostró un comportamiento positivo al cierre de la jornada, impulsado por el sector industrial y bancario.
- Representantes del sector privado han solicitado formalmente la revisión del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras para estimular el uso del

MATERIAL DE USO RESTRINGIDO

bolívar en operaciones comerciales.

- La oferta pública de acciones de empresas del sector alimentos ha tenido una recepción masiva entre los inversores minoristas locales, agotando los títulos disponibles en pocas horas.
- Consultoras internacionales destacan que Venezuela posee activos industriales subvalorados con un potencial de retorno de inversión superior al promedio de los mercados emergentes.
- El sistema financiero nacional reporta un incremento significativo en el uso de tarjetas de crédito prepagadas en divisas para compras internacionales y servicios digitales.
- Gremios industriales proponen la creación de un fondo de financiamiento especializado para la reconversión tecnológica de la manufactura nacional.
- Se observa una tendencia al alza en los precios de los inmuebles comerciales en las zonas de mayor actividad económica de la capital tras la flexibilización de sanciones.
- La banca privada venezolana ha comenzado a ofrecer servicios de custodia de títulos valores internacionales para clientes con perfiles de inversión sofisticados.
- Expertos en materia tributaria recomiendan una simplificación de los trámites mercantiles para fomentar la creación de nuevas empresas formales en el país.
- El mercado de valores ha servido como mecanismo efectivo para el financiamiento de la siembra de cereales a través de certificados bursátiles de inversión agrícola.
- Se reporta un aumento en la utilidad operativa de las empresas de telecomunicaciones privadas gracias a la expansión de las redes de fibra óptica en las principales ciudades.
- Analistas financieros coinciden en que la reintegración al sistema multilateral es el paso definitivo para la estabilización de la balanza de pagos nacional.
- La demanda de servicios de consultoría estratégica y auditoría financiera ha crecido exponencialmente ante la llegada de nuevos inversores extranjeros.
- Grandes grupos empresariales nacionales están explorando la posibilidad de emitir bonos de deuda en mercados regionales como una forma de diversificar su financiamiento.
- El sector de la construcción privada muestra signos de reactivación enfocada exclusivamente en proyectos de oficinas y locales comerciales de alta gama.
- La transparencia en la publicación de los indicadores macroeconómicos por parte del ente emisor ha sido bien recibida por las agencias de calificación de riesgo.